

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hergano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. y AA. Llegaron el 21 al Real Sitio de Aranjuez a las seis y ocho minutos de la tarde en donde continuaron sin novedad en su importante salud.

ARTÍCULO DE ORIGEN.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 213.

En la Gaceta de Madrid número 90 del viernes 30 de marzo último se lee lo siguiente:

Real orden adoptando varias disposiciones que han de observarse en los expedientes de deslinde de cualquier monte público.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Montes.

Al Gobernador de la provincia de Granada digo con esta fecha lo siguiente:

«Visto el expediente relativo al deslinde de los terrenos y monte existentes en el sitio llamado Humbría de la Sagra, término de la ciudad de Huescar en esa provincia, promovido á instancia de D. Manuel Romero Orta y otros, dueños que dicen ser de los expresados terrenos».

Visto el dictamen emitido en el mismo expediente por ese Consejo provincial, según el cual no procedería aplicar el Real decreto de 1.º de abril de 1816, al deslinde de montes que no sean del Estado. Vistos los antiguos 20 y 21 de las Ardenanzas generales de montes de 22 de diciembre de 1833, con arreglo á los cuales los deslindes y amojonamientos de los montes pueblanos, por los mismos bajos la Administración ó el régimen de la Dirección general del ramo deben practicarse gubernativamente en la forma que allí se expresa.

Visto el art. 22 de las mismas Ordenanzas, que en el caso de haber entre los interesados en estos deslindes algun propietario ó propietarios particulares y me-

diar reclamaciones por su parte ó contra ellos, disponia que no pudiéndose terminar estos por vía de reclamación ó transacción, se acudiese á los Tribunales ordinarios.

Visto el art. 8.º párrafo sétimo de la ley orgánica de los Consejos provinciales de 2 de abril de 1845, que atribuye al conocimiento de los mismos, en el concepto de Tribunales, las cuestiones relativas al deslinde y amojonamiento de los montes del Estado y de los que pertenecan á los pueblos ó á los establecimientos públicos; reservando las cuestiones sobre la propiedad á los Tribunales competentes.

Visto el Real decreto de 1.º de abril de 1846, que fijó reglas y trámites para ejecutar los deslindes de los montes del Estado, y especialmente sus artículos 12, 13 y 21, en los que se determinan en el primero, que los interesados puedan usar de su derecho ante los Consejos provinciales contra las providencias de los Gobernadores, con arreglo al artículo y párrafo citados de la ley de 2 de abril de 1845; en el segundo, que se reserven á los Tribunales de primera instancia las cuestiones de propiedad que se susciten en los deslindes; y en el tercero que se remitan al Ministerio para la Real aprobación las diligencias y planos del deslinde.

Vista la Real orden de 20 de junio de 1832, que declaró que la de 16 de febrero de 1817, por la que se suspendió el deslinde general y simultáneo prescrito por el Real decreto de 1.º de abril de 1816, no obsta para que las disposiciones de este sean cumplidas en cualquiera de los casos en que convenga hacer deslindes de montes sujetos á las Ordenanzas.

Considerando la necesidad de fijar una regla que señale de una manera clara los casos en que deben venir los expedientes de deslinde al Ministerio, á fin de evitar las dudas y dificultades que se han suscitado en este punto, y la diferencia de interpretaciones dadas por los Gobernadores á los mencionados artículos del Real decreto de 1.º de abril de 1816.

Considerando que, cuando los asuntos se hagan contencioso-administrativos ó se susciten cuestiones de propiedad, no es necesaria ni procede la resolución del Ministerio, pues, aunque solo se le concediese carácter gubernativo, no podrían en el primer caso recurrir contra ella los interesados al Consejo provincial, y en el segundo sería inconveniente que se resolviese por Real orden en asunto que debería ser sometido al conocimiento de los Tribunales de primera instancia, habiendo de ir necesariamente mezcladas y confundidas por la naturaleza misma de las cosas las cuestiones del expediente gubernativo de pertenencia y de deslinde con las de propiedad;

Considerando que cuando no suceda lo uno ni lo otro, y el deslinde se haya llevado á efecto sin producir en definitiva reclamaciones de ninguna clase, el Ministerio no puede prescindir de examinar si los intereses públicos han sido perjudicados; La Reina (Q. D. G.), oída la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha dignado resolver:

1.º En todos los casos en que se haya de hacer deslinde de cualquier monte público, ya pertenezca al Estado, ya á los pueblos ó corporaciones ó establecimientos de cualquier clase, se observarán las disposiciones del Real decreto de 1.º de abril de 1846.

2.º El Gobernador dictará siempre providencia aprobando ó desaprobando las diligencias de deslinde. Si hubiere reclamaciones, resolverá también acerca de ellas; y contra sus resoluciones se podrá acudir por los interesados ante el Consejo provincial con arreglo al art. 8.º párrafo sétimo de la ley orgánica de los Consejos provinciales de 2 de abril de 1845, y al art. 12 del referido Real decreto de 1.º de abril de 1846.

3.º Si surgieren cuestiones de propiedad, se reservará su conocimiento á los juzgados de primera instancia, en la forma y tiempo que establece el art. 13 del expresado Real decreto.

4.º Se someterán á la Real aprobación todos los expedientes de deslinde en que no se hayan suscitado cuestiones contencioso-administrativas ni de propiedad; debiéndose hacer constar siempre, tanto la providencia definitiva del Gobernador, como la aquiescencia que le hayan prestado todos los interesados.

5.º Las cuestiones contencioso-administrativas á que se refiere el párrafo anterior, son las que versan sobre puntos principales del expediente de deslinde y con cuya resolución quede éste definitivamente concluido; pues cuando solo interese á algun punto incidental ó secundario de tramitación, no deberá omitirse á su debido tiempo la remisión del expediente al Ministerio en solicitud de su aprobación.

De Real orden lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento en los expedientes de deslinde que se promuevan en esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1860.—Corvera.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Obras públicas.

Reglamento para la distribución de aguas del Canal de Isabel II.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) ha resuelto aprobar el adjunto reglamento que

deberá observarse en el abono á las aguas del Canal de Isabel II con destino al consumo en el interior de los edificios de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de marzo de 1860.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

REGLAMENTO.

QUE DEBERÁ OBSERVARSE EN EL ABONO A LAS AGUAS DEL CANAL DE ISABEL II CON DESTINO AL CONSUMO EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE MADRID.

TITULO PRIMERO.

Concesión de las aguas.

Artículo 1.º El abono á las aguas del Canal puede hacerse de dos maneras distintas:

1.º Por cantidad determinada con llave de aforo.

2.º Por valoración alzada á caño libre.

Art. 2.º En el primer sistema el abonado recibirá por un año continuo y uniforme el caudal de su abono. El agua se recogerá en un depósito, de donde á voluntad del abonado podrá tomarse directamente por medio de vasijas, ó llevarse por cañerías á los puntos ó habitaciones donde haya de emplearse.

Art. 3.º En el segundo sistema el abonado tomará el agua en los momentos en que la necesite de uno, dos ó mas grifos, á voluntad suya, colocados en el interior de su finca; estos grifos estarán en comunicación directa con la cañería de la calle, y por la abundancia con que verterán el agua harán inútiles los depósitos que la recogen y conservan.

Art. 4.º El primer sistema es aplicable indistintamente á todos los que lo soliciten: el segundo solo tendrá lugar cuando el Consejo lo estime conveniente á petición del interesado.

Art. 5.º Los abonos se harán separadamente para cada finca, aun cuando estén contiguas y pertenezcan al mismo dueño.

Art. 6.º Los abonos se harán por reales fontaneros y cuartillos completos de real; no se hará concesión ni por de un cuartillo.

Art. 7.º Las concesiones de abono se harán por decisión del Consejo como delegado del Gobierno, y mediante la conformidad prestada por el interesado á las condiciones del presente reglamento.

TITULO II.

Condiciones del abono.

Art. 8.º Las concesiones de abono van unidas á las propiedades que la reciben, y

no pueden transferirse por lo tanto de uno a otro inmueble.

Art. 9.º Es obligatoria para el interesado, si su abono se hace por el sistema de caño libre, la aplicación del agua únicamente a los usos que haya convenido con la empresa, quedando por lo tanto expresamente prohibida la cesión total o parcial de las aguas en beneficio de un tercero. Solo en caso de incendio podrá faltar a esta disposición.

Art. 10.º Cada toma particular tendrá una llave de aforo si el abono se hace por cantidad determinada, o solo una llave de paso si se hace por volumen o grado. Estas llaves se colocarán en un pequeño registro construido en el interior de la finca que reciba el agua si la llave es de aforo, o en el exterior si es de paso solamente.

Art. 11.º La toma de agua y la colocación y suministro de la tubería, llaves y piezas necesarias para conducir las aguas desde la cañería pública hasta la entrada de la casa se harán por los agentes de la Dirección, satisfaciendo, sin embargo, el abonado su importe con arreglo a la tarifa que acompaña a este reglamento. El resto de las obras se hará por el abonado con los materiales y operarios que escoja; pero sujetándose siempre a la inspección de los dependientes de la empresa, quienes fijarán los diámetros de los orificios de toma y salida de las aguas hasta el depósito inclusive si el abono es por cantidad determinada; y los de todos los que se coloquen dentro de la finca si el abono fuere a caño libre.

Art. 12.º Antes de dar el agua al abonado se levantará a presencia suya, por los dependientes de la Dirección del Canal y con la diferencia consiguiente a lo que según la diversidad de abonos se establezca al final del artículo anterior, un plano detallado de las cañerías, depósitos, bocas, llaves etc. etc. y de las piezas que atraviesen o donde estén colocadas. Este plano, firmado por el abonado, se unirá al expediente de su concesión.

Art. 13.º El abonado no podrá hacer variación alguna en las cañerías, llaves y demás aparatos hasta el depósito inclusive, o en los que constituyen la distribución interior que recorre todo el edificio, según fuere el sistema de abono, sin haber obtenido una autorización expresa y por escrito del Consejo. Estas variaciones se someterán a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de este reglamento.

Art. 14.º La distribución de las aguas en el interior de las fincas, cuando el abono fuere a caño libre, estará sujeta a la inspección de los dependientes de la Dirección, quienes podrán entrar en las piezas donde se hallen las cañerías, llaves y demás aparatos. Si el abono es por cantidad determinada, se limitará la inspección a la parte del edificio que recorra la cañería desde el punto por donde entra el agua en el hasta el depósito inclusive. En uno y otro caso será necesaria una autorización escrita del Consejo, y deberá preceder aviso al dueño de la finca, o al inquilino, si estuviese arrendada.

TITULO III.

Duración, interrupción y rescisión de los abonos.

Art. 15.º La duración de los abonos es de cinco años consecutivos, a contar desde 1.º de enero o julio siguiente a la época en que se haya hecho el abono.

Art. 16.º Si el curso de las aguas experimentase en algunas cañerías, o en toda la distribución, variación o interrupción de las que son inherentes a esta clase de obras, no dará esta circunstancia derecho al abonado a reclamar abono alguno a título de indemnización de daños o perjuicios; pero si la interrupción del servicio se prolongase más de diez días continuos o interpolados en todo el tiempo del abono, se restará del importe de este la parte que correspondiera a los demás días en que no hubiesen corrido las aguas.

Art. 17.º Espirado el plazo de la sus-

crpción, podrá el abonado renovar la con arreglo a las mismas condiciones y tarifas, si estas no han tenido alteración, o a las que entonces estuvieren aprobadas por el Gobierno. Si el abono no se continúa, satisfará con arreglo a tarifa los gastos de cerrar definitivamente la toma de aguas; pero quedará dueño de todas las cañerías, llaves y piezas que hayan servido para su abono.

Art. 18.º La contravención a cualquiera de las condiciones de este reglamento llevará consigo la rescisión del contrato, salvo el derecho del Consejo para reclamar ante la Autoridad gubernativa la indemnización de perjuicios que se hubieren ocasionado por el abonado.

TITULO IV.

Tarifa y pago de los abonos.

Art. 19.º El abono por cantidad determinada se hará a razón de 1,000 rs. al año por cada real fontanero.

Art. 20.º La tarifa del abono a caño libre se graduará calculando el gasto que cuesta hacerle, del agua se un las circunstancias de cada caso, y servirá de tipo para la cantidad que haya de satisfacerse a la empresa el precio del real fontanero establecido en el artículo anterior.

Art. 21.º Bajo ningún pretexto podrán hacerse concesiones gratuitas a particulares, corporaciones o establecimientos públicos.

Art. 22.º Los pagos se harán en la Secretaría del Consejo por semestres adelantados. El primer pago comprenderá, además del importe del primer semestre, la cuota correspondiente al tiempo que medie entre el día en que empiece a correr el agua en el interior de la finca y el 1.º de enero o julio inmediato.

Art. 23.º No empezarán a correr las aguas de ningún abono hasta que se haya verificado el pago de que habla el artículo anterior.

Art. 24.º La falta de exactitud en los pagos lleva consigo la suspensión del servicio sin previo aviso, y si el retraso se prolonga más de quince días, se quitará la comunicación de la cañería particular con la pública, quedando a disposición de la empresa la toma de aguas, las llaves de paso y aforo y el trozo de cañería situado en el exterior de la finca.

TITULO V.

Disposiciones generales.

Art. 25.º El servicio de la distribución se hará a medida que se vayan colocando las cañerías del interior.

El Consejo avisará por la Gaceta y el Diario las calles en que puede establecerse este servicio, y los dueños o inquilinos de casas de dichas calles que deseen abonarse lo harán presente por medio de oficio al Presidente del Consejo, indicando en su comunicación la calle y número de la casa, el sistema de abono, la cantidad de agua que desean obtener y las señas de su habitación.

Art. 26.º Acordado por el Consejo el modo y forma del abono, y admitida por el interesado, satisfará éste en la Secretaría del Consejo la cantidad que marca el artículo 11, y entonces se procederá por la empresa y por el abonado a la colocación de los aparatos de que hablan los artículos 10 y 11.

Art. 27.º Las reclamaciones se dirigirán al Presidente del Consejo.

Tarifa de los precios que deberán satisfacer los abonados a las aguas del Canal de Isabel II por la colocación y suministro de la tubería y piezas desde la cañería pública hasta la entrada de sus propiedades.

Taladrar la cañería general, suministrar y colocar la pieza de toma y la tubería desde esta hasta la fachada de la casa, cualquiera que sea la calle.

Cada llave de aforo con su caja de hierro y llave.	400
Cada llave de paso.	70
Cada platillo de hierro para la unión de la tubería.	3
Cada tornillo con su tuerca para los mismos platillos.	6
Cada registro para la colocación de las llaves con buzon de piedra o hierro.	90
Cada metro de cañería colocado en el interior de la misma finca hasta llegar a la llave de aforo.	20
Cada metro de cañería de desagüe a las bajadas de aguas.	42
Por cerrar la comunicación de un acometimiento particular con la cañería pública, reemplazando la pieza de toma con un tapon de bronce a rosca.	80

Madrid 26 de marzo de 1860. Aprobado por S. M. — Corra.

Real orden concediendo a D. Mariano Sanz el premio que solicitó de exención por el término de 10 años de aumento de contribución en unas 12 hectáreas de terreno que ha convertido de secano en regadío en el pueblo de Caldas de Mombuy.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Agricultura.

Excmo. Sr.: En 26 de noviembre del año próximo pasado dijo el Excmo. Señor Ministro de Fomento al de Hacienda de Real orden lo que sigue: Vista el expediente instruido a instancia de D. Mariano Sanz, vecino de Barcelona, en solicitud de que se le exima por el término de 10 años de aumento de contribución en unas 12 hectáreas de terreno que ha convertido de secano en regadío en el pueblo de Caldas de Mombuy, invirtiendo al efecto más de 46,000 rs. y dando a las tierras por esto solo hecho considerable valor del que tenían anteriormente.

Vista la ley de 24 de junio de 1849, y la Real orden aclaratoria de la misma de 29 de noviembre de 1850, y Vistos igualmente el informe del Ingeniero que ha reconocido las obras, afirmando la exactitud del desembolso; el de la Junta de Agricultura, que estima justa la pretensión del interesado; y el favorable del Consejo provincial y Gobernador de la provincia; S. M. la Reina (Q. D. G.), de conformidad con dichos dictámenes, se ha servido declarar que el premio que debe concederse a D. Mariano Sanz, el máximo de exención de tributos que previene la citada ley sobre el mayor valor que por los riegos han adquirido las expresadas tierras, y que para los efectos del art. 2.º de la expresada Real orden de 29 de noviembre de 1850 se remita el expediente, como lo verifico, al Ministerio del digno cargo de V. E., encargándole ponga en noticia de este de Fomento la resolución que adopte S. M. a propuesta de esa Secretaría.

En su consecuencia, por el Ministerio de Hacienda se traslada al de Fomento con fecha 9 del corriente la orden de S. M. que por aquel centro administrativo ha sido dirigida al Director general de Contribuciones, que dice así: novagada. Excmo. Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido a instancia de D. Mariano Sanz, vecino de Barcelona, en solicitud de que se le exima por el término de 10 años de aumento de contribución en unas 12 hectáreas de terreno que ha convertido de secano en regadío en el pueblo de Caldas de Mombuy, y considerando que la exención solicitada está comprendida en el art. 3.º de la ley de 24 de junio de 1849, así como que el expediente se ha instruido con arreglo a lo prevenido en la Real orden de 29 de noviembre de 1850, S. M. se ha dignado mandar, de acuerdo con los dictámenes de la Asesoría general de este Ministerio y

el de V. E., que se acceda a la exención solicitada por D. Mariano Sanz, entendiéndose que el término de 10 años ha de empezar a contarse desde el 23 de diciembre de 1857, fecha de la exposición del interesado, en que se dice estar terminadas las obras.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, el del interesado y demás efectos consiguientes, disponiendo la inserción en la Gaceta oficial para estímulo de los terratenientes interesados en el alumbramiento de aguas. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1860. — José Joaquín Mateos. — Señor Gobernador civil de la provincia de Barcelona.

Número 241.

En la Gaceta de Madrid núm. 103 del jueves 12 del actual se lee lo siguiente:

Real orden declarando extensivo a los cuerpos político-militares del ejército y armada el Real decreto de 30 de octubre de 1855.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), con presencia de lo manifestado por V. E. en su escrito de 31 de agosto último y de lo informado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en acordada de 15 del mes próximo pasado, se ha servido declarar extensivo a los cuerpos político-militares del ejército y armada el Real decreto de 30 de octubre de 1855, exigiéndose a todos los individuos de ellos que soliciten Real licencia para casarse y no disfruten el sueldo mensual de 40 duros en la Península y 100 en Ultramar, el depósito en los términos que se hallan prevenidos para los de los respectivos ejércitos; que cuando los interesados la obtengan con opción a los beneficios del Montepío militar puedan retirar si les acomoda el depósito en el momento de ascender a un empleo que tenga el prerrogativo sueldo de 40 duros en la Península y 100 en Ultramar, pues si se casan sin aquella ventaja estarán a lo que en el referido Real decreto se dispone respecto a los depósitos hechos por los Tenientes y Subtenientes, y que las circunstancias de edad de que habla su art. 1.º, no se entienda aplicable a los cuerpos políticos del ejército y armada, quedando por lo tanto derogadas las Reales órdenes de 29 de febrero de 1856 y 23 de mayo de 1858 relativas a este asunto.

De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de abril de 1860. — Mac-Crohon.

— Sr. Director general de Administración militar.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Gobierno. — Negociado 3.º — Quintas.

Pasado a informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido por Pedro Antonio Miguez y Barros, quinto del reclutamiento ordinario del año último por el cupo de Cesuras, en reclamación contra el acuerdo por el que el Consejo provincial de la Coruña, revocando el del Ayuntamiento del expresado pueblo, le declaró soldado, la indicada Sección ha emitido sobre este asunto el siguiente dictamen:

Que Pedro Antonio Miguez alegó ante el Ayuntamiento en el acto de la declaración de soldado ser hijo único de viuda pobre, presentando en el acto testigos para acreditar que auxilia a la misma

La union aduanera de la Inglaterra y la Irlanda, inaugurada en 1720; la de los Estados alemanes, que se ha venido formando desde 1828 á 1851; la de la Rusia con la Polonia, celebrada en 1853; la del reino de Cerdeña, los Estados Pontificios, Toscana y Luca, contratada en 1817, y la de toda la Italia, negociada en 1859 al firmar la paz de Villafranca; la proyectada há tiempo entre Bélgica y Francia y la promovida hoy en Holanda y Bélgica, no tienen mas razón de ser ni de interés que la union aduanera de España y Portugal. El carácter expansivo de los habitantes de los Estados peninsulares, su comun idioma, una frontera abierta sin montañas que la aminoran,

llen en mas de 180 leguas, todo da vida á un activo, poderoso e inmorral contrabando, imposible de evitar, todo parece reclamar la supresion de las aduanas lusitano-lusas, la libre circulacion de ahuas puebls por tierra, rios y mares de sus provincias de la Peninsula y de Ultramar.

La comision de la Sociedad economica matritense que entiende en tan grave cuestion internacional, ha resuelto dirigirse á V. suplicandole emita su distinguida opinion y exerce con el mismo fin á los hombres mas ilustres en la república de la politica y de la economia social para que el resultado de esta comision, corresponda en lo posible á lo que deseamos los que tenemos el honor de ofrecerle á V. con la mas distinguida consideracion S. S. S. Q. R. S. M.

El presidente, Arturo de Marcoartú. —Manrico Carlos de Oñis. —L. Figuerola. —Cayetano Cardero. —Felix Bona. —Joaquin Maria Sanroma. —Vicente Barriant. —Camilo Labrador. —Jose C. Villanova. —Pedro Oller y Canovas. —El secretario, Manuel Malo de Molina.

La que he dispuesto se publique en este periódico oficial para que llegando á noticia de las personas que por su instruccion y posicion social puedan y quieran ilustrar á la Comision con sus conocimientos especiales en materia de tanta importancia para los intereses generales de España, y á fin de que los dignos individuos que la componen vean cumplidas sus patrióticas deseos. Orense, 19 de abril de 1860. —El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

CIRCULAR NUM. 217.

Real orden de 20 de marzo último resolviendo como regla general que cualquiera que sea el estado que tenga la sal que se aprehenda, procede aplicarse á los defraudadores las penas que segun los casos señala el Real decreto de 20 de junio de 1852 y estimarse la sal para la imposicion de la multa por el precio de Estanco establecido ó que en adelante se estableciere.

Seccion 6.ª—Negociado único.—Hacienda.

La Direccion general de Rentas Estancadas en 14 del actual me dice lo que sigue:

Por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se ha comunicado á esta Direccion general en 28 de marzo último la Real orden siguiente:

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del expediente instruido en esa Direccion general para demostrar la necesidad y conveniencia de que á la sal, que procedente de aprehensiones se declarara inútil, se la dé algun valor ó estimacion que sirva de base para la imposicion de la multa que establece el art. 25 del Real decreto de 20 de junio de 1852, y conformándose S. M. con lo propuesto por V. I. y con el dictamen que sobre el particular ha emitido la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, se ha dignado resolver como regla general, que cualquiera que sea el estado que tenga la sal que se aprehenda, procede aplicar á los defraudadores las penas que segun los casos señala el mencionado

Real decreto, y estimarse la sal para la imposicion de la multa por el precio de Estanco establecido ó que en adelante se estableciere.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Lo comunico á V. S. para su conocimiento.

Lo que se inserta en este periódico oficial para su debido cumplimiento y publicidad. Orense, abril 24 de 1860. —El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

CUARTA SECCION.

Juzgado de Hacienda de Orense.

Don Juan B. Lugas, juez especial de Hacienda de la provincia de Orense. —Por el presente y á instancia del procurador don Bernardo Maria Pedrayo se cito y compare a Jo-ela Estevez, vecina de Rubias, distrito municipal de Villamea, para que dentro del termino de seis dias improrrogables comparezca en este juzgado por la escriptura del que autoriza á contestar la demanda de pobreza que le ha promovido dicho procurador en nombre de Manuel Dominguez, defensor de Gabriel Lopez, marido de la Josefa, para oponerse en terceria contra ella en reclamacion de bienes; con apercibimiento de que sino compareciere en dicho termino se parara el perjuicio que haya lugar.

Dado en Orense á 16 de abril de 1860. —Juan B. Lugas. —Por su mandado, Valentin de Novoa.

Juzgado de primera instancia de Orense.

Don Bernardo Maria Hervás, juez de primera instancia de la ciudad y partido de Orense. —Por el presente se hace notorio que en el expediente concurso de acreedores, formado á la singularidad de Doña Paula del Valle, viuda que fue de Don Ramon Argandoña, se ha señalado el día 5 de mayo próximo para celebrar junta general de acreedores, á fin de nombrar sindicos conforme á lo dispuesto en el art. 359 de la ley de enjuiciamiento civil; en su virtud se cita y emplaza á todos los que se crean con derecho á dicha fiscalidad concurrir en el día señalado con los documentos en que apoyen sus créditos.

Dado en Orense á 15 de abril de 1860. —Bernardo Maria Hervás. —Por mandado de S. S. Francisco Rodriguez Rapela.

Idem de Bande.

Don Manuel Alvarez, caballero de la Real y distinguida orden española de Carlos III, escribano por S. M. del número y juzgado de primera instancia del partido de Bande. —Certifico, que en el mismo y por mi escriptura se propuso por el procurador Don José Hermida, representando á D. Manuel Gomez, presbítero y vecino de la parroquia de San Andrés de Porqueiros, en 16 de febrero último, interdicto de adquirir posesion de dos suertes de casa en la sala del medio: mitad del cuarto llamado de oficio: mitad del cuarto nuevo encima de la portada del patio, y las dos suertes de huerta, contiguas á la misma casa, sembradura de ellas casa de un copelo, cuya casa se conoce con el nombre de Casa del Escribano, sito en dicho Porqueiros, incluyendo lo que corresponde á D. Pedro Gomez de la propia vecindad, del patio y cubierta que hace de cocina y mitad del pajar nombrado lase con sus correspondientes arboles y resios, linda con José Perez, y monte comun, sito tambien en Porqueiros, procedentes las ex-

presadas suertes de la herencia de la madre comun Doña Gabriela Banco, que habia comprado al D. Pedro Gomez, vecino de Porqueiros, por escriptura otorgada en Gijón de Liria el 16 de marzo de 1858 por fe del escribano de aquí número D. Vicente Diaz Teijeiro. De una suerte de casa nombrada Cuartel del Norte, sita en Porqueiros, que es el cuarto de oficio con su suerte de patio y huerta contigua, primera suerte del norte que demarca con el D. Manuel Gomez, Don José Perez, el cuarto de casa de alto y bajo y la huerta con Doña Carmen Gómez y riego; que por título de permuta adquiriera de D. Juan Gomez, vecino de Baroizás, por escriptura que en 16 de noviembre último otorgara en Gijón de Liria ante dicho escribano D. Vicente Diaz Teijeiro. En cuya vista se proveyó el auto que dice:

Presentada esta solicitud con el poder y títulos de pertenencia de que hace mérito; hace en virtud de aquel al procurador Hermida por parte legítima en este asunto á nombre de D. Manuel Gomez; y resultando suficientes los indicados títulos para el objeto con que se han producido y que nadie posee los bienes de su referencia como dueño ni como usufructuario, dese de ellos la posesion solicítala á dicho procurador por alguacil de este juzgado, acompañado del originario, expidiéndose al efecto el oportuno mandamiento. Lo manda y firma el Sr. Don José Maria Vazquez de Povadura, juez de primera instancia de este partido en Bande, febrero 25 de 1860. —José Maria de Povadura. —Ante mí, Manuel Alvarez. Cuya posesion fué dada en 5 de marzo también último y hechas las correspondientes intimaciones á los que posean los bienes, se acordó publicar por edictos en este pueblo y en el Boletín oficial de la provincia á medio de testimonio que se remitiese al Sr. Gobernador civil el auto por que se mandó dar dicha posesion y los bienes que fueron objeto de ella. Y para que conste, cumpliendo con lo mandado, libro el presente que hice escribir y firmo en este pliego entero papel selio tercero con el Visto Bueno del señor Juez.

Bande, abril 18 de 1860. —Manuel Alvarez. —V. B. José M. Vazquez de Povadura.

Juzgado de paz del Barco de Valdeorras.

Don José Fernandez Nieto, secretario del juzgado de paz del distrito del Barco de Valdeorras. —Certifico que en este juzgado se celebró juicio verbal entre Don Manuel Gonzalez, del Corrijo y en rebeldia de D. Tomás Alvarez, de Arnado, en el que recayó la sentencia siguiente: En el Barco á 4 de abril de 1860.

El Lic. D. Joaquin Valcarlos Ponce de Leon, juez de paz de este distrito.

Habiendo visto el acta de juicio verbal celebrado entre D. Manuel Gonzalez, representante de D. Felix Nabajas, vecino del Corrijo y en rebeldia de D. Tomás Alvarez, párroco de Arnado, por ante mí secretario, dijo:

Resultando que D. Manuel Gonzalez, en nombre de D. Felix Nabajas demandó en 29 de marzo á D. Tomás Alvarez por la cantidad de 400 rs. que este adeuda al poderdante de aquel, procedentes de préstamo.

Resultando que el demandado, sin embargo de haber sido citado en debida forma no compareció al juicio, bajo el pretexto de que no estaba obligado á hacerlo, en atencion á gozar de fuero eclesiástico, según á él le parecia.

Considerando que el demandante ha justificado su crédito, no solo con una obligacion y certeza, suscritas por el demandado, sino tambien por dos testigos que deponen sobre la certeza del crédito reclamado.

Considerando que por el art. 1162 de la ley de enjuiciamiento civil, es privativo

de los jueces de paz, en primera instancia el conocimiento de todas las cuestiones entre partes que no exceda de 600 rs., disposicion que exclusivamente de jurisdiccion especial, mediante no hay otra clase de jueces de paz que los referidos por la indicada ley, y que por estas razones no es atendible el fuero de que se cree asistido el párroco de Arnado.

Fallo, que debe condenar y condena á Don Tomás Alvarez á que pague á Don Manuel Gonzalez, representante de Don Felix Nabajas, la cantidad de 400 rs., así como tambien las costas á que dió lugar. Y por esta sentencia definitiva, que se publique en los estrados del juzgado y en el Boletín oficial de la provincia, según lo dispone el art. 1190 y demas consiguientes de dicha ley, lo pronuncio, mando y firmo de que certifico. —Joaquin Valcarlos Ponce de Leon. —José Fernandez Nieto, secretario.

Así resulta de dicho juicio á que me remito, y en cumplimiento de lo prevenido expido el presente en el Barco á 4 de abril de 1860. —José Fernandez Nieto.

QUINTA SECCION.

ADMINISTRACION PRINCIPAL.

DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.

Por renuncia que de sus destinos han hecho varios estancadores y defuccion de otros, el Sr. Gobernador civil de esta provincia acordó la publicacion de las vacantes siguientes:

Nicolas Lorenzo, situado su estanco en Porqueiros, de la Administracion de Allariz. Facundo Guede, idem en Puente Ambia, de la de idem. José Siso, idem en Villanueva de las Infantes, de la de Celanova. Baltasar Dieguez, idem en Valoria, de la de Rua de Valdeorras. Martin Arias, idem en San Juan de Rio, de la de Trives. Tomas Dominguez, idem en San Juan de Argas, de la de Trives. Pedro Macias, idem en Fuentesria, de la de Verin.

En su consecuencia, los sujetos que se crean aptos para su desempeño, pueden desde luego dirigir sus solicitudes al Sr. Gobernador civil, manifestando en ellas poder pagar al contado los efectos que se le entreguen para la venta y reunir las circunstancias prescritas en la Real orden de 5 de julio de 1858, acompañando copias legalizadas de sus licencias absolutas ó documentos que acrediten servicios prestados al Estado, dentro del termino de ocho dias á contar desde su publicacion.

Orense 24 de abril de 1860. —Joaquin Maria Espiau.

Junta provincial de instruccion pública de Orense.

Para que las Juntas locales que no han cumplido aun con lo prevenido en la circular que se les dirigió en 20 de diciembre último, lo verifiquen dentro de sexto dia.

No habiendo aun dado cumplimiento algunas Juntas locales á lo acordado por esta Provincial en la circular que les dirigió en 20 de diciembre último á consecuencia de lo dispuesto en la Real orden de 18 de octubre anterior, sobre organizacion y arreglo de escuelas de Galicia, se les previene lo verifiquen sin excusa ni pretexto alguno dentro del termino de sexto dia.

Orense 22 de abril de 1860. —Hermenegildo Guilian. —Eliseo Fidalgo y Saavedra, secretario.